

LA “OLA NARANJA” LATINOAMERICANA

Kenneth Ramírez (*)

4 de septiembre de 2026

Entre 2023 y 2026 —pero con notable impulso tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca—, el mapa político de América Latina ha venido cambiando de manera significativa.

The Economist denominó el fenómeno como “ola naranja”¹, en alusión al bronceado artificial del Presidente Trump, dado que más allá del giro ideológico a la derecha, lo que se ha venido imponiendo es una forma de hacer política: personalismo, discurso populista y nacionalista, polarización, rechazo hacia las instituciones nacionales y globales, comunicación apalancada en las redes sociales y la IA, guerra cultural a las izquierdas, promesas de bienestar económico, mano dura contra el crimen organizado y lucha contra la migración irregular.

En consecuencia, el fenómeno puede explicarse, en parte, por el modo en que el Presidente Trump ha fomentado —primero con el ejemplo y después con el intervencionismo— una nueva cepa del viejo virus populista

¹ The Economist, *The Orange Wave. Latin America has turned Trumpy. That creates opportunities*, Londres, 25 de junio de 2026. Disponible en: <https://www.economist.com/leaders/2026/06/25/latin-america-has-turned-trumpy-that-creates-opportunities>

latinoamericano. Aunque hacer comparaciones es siempre riesgoso, resulta difícil ignorar las similitudes del movimiento *Make America Great Again* (MAGA) con las experiencias populistas latinoamericanas. En este sentido, *The Atlantic* ha afirmado que Trump es “el Perón de EEUU”².



Una segunda lectura describe la “ola naranja” como un nuevo ciclo político regional producto de un cambio de las preferencias ideológicas del electorado latinoamericano. Al igual que ocurrió con la “marea rosa” (1998-2014), así como con la más breve y acotada “marea rosa 2.0” (2018-2022), existen muchas críticas a este marco de análisis. Cada país tiene su propia historia y cada líder sus propias motivaciones, estilo e ideas a pesar de poder ser incluido en el mismo espectro ideológico.

Empero, al observar más de cerca la nueva “ola naranja”, la causa que luce más determinante es la incapacidad de los líderes, partidos y movimientos

² The Atlantic, *America's Peron*, Washington, 7 de septiembre de 2025. Disponible en: <https://www.theatlantic.com/economy/archive/2025/09/trump-peron-argentina-economy/684117/>

gobernantes para generar resultados tangibles y renovar la promesa que las condujo al poder, sobre todo en materia económica y de seguridad ciudadana.

Ergo, el motor o causa eficiente de la “ola naranja” no es el trasplante populista y/o el cambio ideológico en el electorado latinoamericano — aunque están presentes como coadyuvantes—, sino la frustración y la decepción. En suma, estamos asistiendo a un voto de castigo contra los gobiernos incumbentes que han sido ineficaces.

La metáfora y sus límites.

La noción de “ola” presupone un cambio político dotado de impulso y homogeneidad. Ciertamente, ha avanzado rápidamente: basta recordar que se hablaba de una “marea rosa 2.0” en 2022 cuando las seis principales economías latinoamericanas tenían gobiernos de izquierdas. No obstante, las nuevas derechas regionales no lucen ahora completamente uniformes ni su ascenso tan sólido como la metáfora sugiere.

Aunque doce de los quince presidentes electos desde 2023 pertenecen a las derechas latinoamericanas y las siete elecciones presidenciales celebradas desde el inicio del segundo mandato del Presidente Trump se resolvieron en ese sentido, los márgenes de estos triunfos desmienten la imagen de un nuevo ciclo político respaldado por grandes mayorías latinoamericanas y un arrastre contundente del líder estadounidense.

Javier Milei fue superado por Sergio Massa en la primera vuelta argentina de octubre de 2023 y sólo alcanzó una victoria amplia en el balotaje de noviembre de 2023 —55,65% frente a 44,35%— al sumar los votos de centro-derecha tradicional. Dinámica similar vivió José Antonio Kast en su tercer intento de conquistar la Presidencia de Chile: relegado al segundo lugar en la primera vuelta, se impuso en el balotaje en diciembre de 2025 por 58,61% frente a 41,39% al lograr el respaldo de quienes habían apoyado a otras candidaturas del mismo espectro ideológico. En Honduras, Nasry Asfura fue proclamado ganador con 40,27% frente a 39,53%, tras veinticuatro días de escrutinio especial.

En Perú, Keiko Fujimori se impuso en el reñido balotaje celebrado en junio de 2026 con un 50,14% frente al 49,87% de los votos. Su victoria se produjo tras una primera vuelta atípica que tuvo lugar en abril de 2026, marcada por treinta y cinco candidaturas y un número sin precedentes de votos blancos y nulos, en la cual Fujimori apenas alcanzó la primera minoría con un 17,2%.

En Colombia, Abelardo de la Espriella encabezó la primera vuelta celebrada en mayo de 2026 con 43,74% frente al 40,9% del oficialista Iván Cepeda. Sin embargo, encontró dificultades para sumar el voto centrista en el balotaje que tuvo lugar en junio de 2026: incorporó apenas la mitad de los once puntos que habían obtenido las candidaturas de Valencia y Fajardo, mientras el candidato oficialista crecía casi ocho puntos. De manera que Abelardo de La Espriella obtuvo una victoria estrecha por 49,66% frente a 48,70%, mostrando que donde la polarización es intensa y el oficialismo puede exhibir ciertos resultados y conservar capacidad de movilización, la transferencia del voto moderado deja de ser automática.

Sólo Nayib Bukele en febrero de 2024 y Laura Fernández en febrero de 2026 ganaron con holgura desde la primera vuelta. Las mayorías amplias de Milei y de Kast se construyeron en el balotaje sobre desempeños iniciales modestos, mientras Asfura, Fujimori y De la Espriella apenas llegaron a constituir mayorías estrechas. Por tanto, ninguno de estos últimos mandatarios recibió un contundente respaldo directo a sus propuestas.

Además, estas presidencias nacen con mayorías legislativas precarias y, salvo los casos de El Salvador, República Dominicana y Costa Rica —donde Pueblo Soberano obtuvo 31 escaños de 57, con la primera mayoría absoluta desde 1990—, deberán gobernar mediante coaliciones inestables en sistemas de partidos crecientemente erosionados.

Por consiguiente, más que la formación de un bloque político regional hegemónico, lo que se observa —al menos por ahora— es un conjunto de victorias de líderes de derecha que conviene ordenar según dos criterios distintos: la posición ideológica y la relación con el sistema de partidos. El núcleo más distintivo de la “ola naranja” lo componen liderazgos de derecha radical como Bukele, Milei, Noboa, Kast, Fernández y De la Espriella, los cuales son populistas críticos del *establishment* que prometen soluciones inmediatas al electorado, con las dificultades de gobernabilidad que esto implica. El fujimorismo comparte con ellos la radicalidad —puede decirse que fue, de hecho, precursor del “modelo Bukele” en la década de 1990s—, pero no una completa exterioridad al sistema de partidos, porque Keiko Fujimori heredó el espacio político de su padre y consolidó el partido Fuerza Popular, logrando la victoria en su cuarto intento. Y en un tercer grupo se sitúan derechas convencionales como las de Abinader, Mulino, Paz, Peña y Asfura, cuyas victorias responden a la lógica del castigo al oficialismo sin impugnación del *establishment*.

[illegible]

5

La serie histórica refuerza además nuestra objeción. Entre 1998 y 2002, el electorado latinoamericano se autodefinía más a la derecha que en el presente, y en aquellos años se produjeron las victorias de Hugo Chávez en Venezuela y Lula da Silva en Brasil que marcaron el inicio del ciclo político luego denominado “marea rosa”. Es decir, el electorado de la región más identificado con la derecha de toda la serie produjo una hegemonía de las izquierdas. La covariación entre la preferencia ideológica declarada y la dirección del voto resulta, en consecuencia, débil.

El cambio ideológico del electorado latinoamericano existe y opera como una condición facilitadora de la “ola naranja”. Empero, el motor o causa eficiente debemos buscarlo en otro lugar.

Los estudios de Ciencia Política comparada nos ofrecen la clave: el elector latinoamericano tiende a comportarse como juez retrospectivo⁴, premiando o castigando en función de resultados verificables en materia de seguridad, empleo, precios y probidad, con fidelidad escasa a identidades e ideologías.

El voto retrospectivo permite explicar la tendencia general anti-incumbente, aunque deja pendiente la dirección de su reemplazo, cuestión sobre la que volveremos al cierre del presente apartado.

También hace posible dar cuenta de algunos casos donde los electores latinoamericanos han optado por la continuidad. Daniel Noboa fue reelecto en Ecuador en 2025, aunque allí influyó adicionalmente el miedo a un regreso del “correísmo”. Javier Milei amplió su representación parlamentaria en las legislativas argentinas de octubre de 2025; y Laura Fernández, candidata de continuidad de Rodrigo Chaves, ganó holgadamente en la primera vuelta en Costa Rica mientras el mandatario saliente mantenía una aprobación cercana al 58%. Asimismo, Nayib Bukele conserva niveles de aprobación sin parangón regional que hacen probable su reelección en 2027.

De manera que el electorado latinoamericano ha venido castigando a los gobiernos que administraron mal el ciclo inflacionario posterior a la pandemia con márgenes fiscales estrechos y mal manejo de la criminalidad, mientras que ha premiado a los gobiernos cuyo desempeño es percibido positivamente en materia de seguridad ciudadana, creación de empleos y costo de la vida.

El efecto agregado adquiere apariencia ideológica porque —tal como ya indicamos— venimos de un mapa político regional dominado por las

⁴ Morris P. Fiorina. *Retrospective voting in American national elections*. Yale University Press, New Haven, 1981.

izquierdas antes de 2023. Por tanto, el castigo refleja la composición previa del mapa en una proporción que el desplazamiento de las preferencias ideológicas del electorado, por sí solo, no alcanza a explicar. El corolario resulta incómodo para los líderes de la “ola naranja”, pues la misma regla de evaluación que los llevó al poder se aplicará sobre su gestión.

Cabe hacer una precisión adicional. El voto retrospectivo explica que los electores latinoamericanos hayan castigado a los oficialismos de izquierda con mala gestión, pero no responde por qué en buena parte de los casos el reemplazo ha recaído sobre el núcleo radical de la “ola naranja” y no en alternativas más próximas al centro, que es donde se sitúa el grueso del electorado. Tres explicaciones subordinadas permiten dar cuenta de esta canalización.

En primer lugar, la erosión o el colapso de los partidos tradicionales, que tiende a convertir a los líderes críticos o ajenos al *establishment* en el principal vehículo disponible para el castigo. Incluso en países con doble vuelta, la fragmentación de la oferta en la primera vuelta ha permitido que estos aspirantes se posicionen al concentrar el voto de rechazo y sumen después todo o parte del voto de centro hasta alcanzar la victoria en el balotaje convertido en plebiscito sobre el gobierno saliente. Así ocurrió en Argentina en 2023 y Chile en 2025.

El caso de Perú en 2026 merece comentario aparte, ya que representa una variante del mismo patrón observado. Tal como indicamos, Keiko Fujimori no es una figura ajena al sistema, pero sus tres derrotas anteriores se produjeron mediante la formación de coaliciones anti-fujimoristas que reunieron en segunda vuelta a fuerzas de todo el espectro para impedirle el acceso al poder desde 2011. Esa exclusión reiterada le confirió una exterioridad funcional de la que carecía por trayectoria, y le permitió presentarse en 2026 como alternativa al *establishment* con propuestas similares al núcleo radical de la “ola naranja” en primera vuelta. Luego, en el balotaje moderó su discurso, y la candidatura de izquierda radical de Roberto Sánchez hizo el resto: logró atraer suficientes votos desde el centro hasta la derecha para alzarse con la victoria por margen estrecho.

En los tres casos, la victoria se construyó en el balotaje incorporando a un electorado moderado que no había respaldado a estos aspirantes en la primera vuelta. De ello se sigue una consecuencia que estos mandatarios enfrentarán durante su gestión: el mandato recibido resulta menos radical que el discurso con el que construyeron el movimiento para ganar la primera vuelta.

En segundo lugar, la apropiación por parte del núcleo radical de la “ola naranja” de las temáticas que el electorado latinoamericano valora en la presente coyuntura: seguridad ciudadana, empleos y oportunidades. Lo que estos liderazgos han logrado no es tanto ofrecer mejores respuestas como desplazar la “ventana de Overton”, es decir, el rango de posiciones que la ciudadanía considera aceptables⁵. Medidas que hasta hace poco resultaban impresentables —por ejemplo, la suspensión prolongada de garantías, el encarcelamiento masivo sin debido proceso y la criminalización de la migración— ocupan hoy el centro del debate público. Los candidatos de centro y de derecha convencional quedan así atrapados: si mantienen las soluciones habituales, resultan insuficientes ante la urgencia percibida; si endurecen sus discursos, confirman que el marco de la discusión pertenece a sus adversarios. Esta apropiación temática convierte el descontento difuso con la gestión oficialista en una preferencia electoral determinada, y explica la dirección del voto de castigo.

En tercer lugar, opera el factor Trump, cuyo impacto recae menos en las preferencias del electorado que en la percepción de viabilidad de estas candidaturas. La validación otorgada por el Presidente Trump genera percepción de respaldo externo sobre cualquier candidatura, tenga o no trayectoria política previa, como muestran los casos de Asfura en Honduras y Milei de cara a las elecciones legislativas argentinas de 2025. Adicionalmente, cuando el aspirante carece de experiencia de gobierno, reduce el costo percibido de votarlo y lo convierte en opción viable cuando hasta hace poco era percibido como un salto al vacío, como ilustra el caso de De la Espriella en Colombia. Volveremos sobre este último punto más adelante.

Las prioridades del elector latinoamericano: seguridad ciudadana, empleos y oportunidades.

El hecho de que el crimen organizado se haya convertido en la principal preocupación de los ciudadanos latinoamericanos está reconfigurando la

⁵ La “ventana de Overton” es un modelo político desarrollado por el académico estadounidense Joseph P. Overton, el cual describe el rango de políticas consideradas aceptables por la mayoría de la población en un momento dado. El modelo presenta un espectro de posturas que va desde una mayor regulación gubernamental en un extremo hasta una menor regulación en el otro; los extremos se consideran las opciones menos aceptadas por los votantes. Overton sostenía que este espectro describe cómo los políticos deciden qué políticas respaldar, sugiriendo que tienden a favorecer opciones situadas en el centro del espectro frente a los extremos, los cuales —según el modelo— resultarían menos atractivos para el electorado. El modelo dio lugar posteriormente a estrategias para desplazar dicha ventana.

competencia electoral. Las izquierdas latinoamericanas han apelado a un enfoque integral sobre el combate a la criminalidad, lo cual ha resultado ineficaz electoralmente: un discurso centrado en las causas y las soluciones de largo plazo, más allá de su objetividad y pertinencia, no responde a la demanda ciudadana de protección inmediata.

En cambio, las derechas latinoamericanas capturaron esa demanda mediante un lenguaje de orden y autoridad, y en concreto, a través del “modelo Bukele”.

Desde marzo de 2022, Nayib Bukele ha gobernado El Salvador con un régimen de estado de excepción que ha prorrogado más de 50 veces. Desde que en enero de 2023, Bukele inauguró su hoy famoso Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40 mil reclusos, Daniel Noboa, Laura Fernández, José Antonio Kast, Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella han reivindicado la fórmula de las megacárceles para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado. Incluso algunos han llegado a sumar a la inmigración a la ecuación, dado que la Administración Trump 2.0 llegó a un acuerdo con El Salvador en marzo de 2025 para deportar inmigrantes irregulares al CECOT.

Hoy por hoy, varios países latinoamericanos gobernados por líderes de la “ola naranja” han anunciado una veintena de proyectos inspirados en el modelo salvadoreño. El populismo punitivo transforma algo abstracto —el miedo ante los criminales y la impotencia ante la impunidad— en algo concreto y fácilmente visible: cárceles, detenidos y demostración de autoridad. Mejorar las fiscalías, profesionalizar las fuerzas policiales, hacer más eficaces las investigaciones o promover el empleo juvenil produce pocas imágenes espectaculares para redes sociales; inaugurar una megacárcel y mostrar presos tatuados, con el torso desnudo y sometidos a la disciplina de guardias armados, muchas.

De esta manera, el llamado “modelo Bukele” se ha convertido en el principal referente regional de las derechas latinoamericanas, rompiendo el consenso posterior a las transiciones democráticas, según el cual la eficacia en el combate contra la criminalidad debía lograrse dentro del marco de derechos y garantías, y demostrando que su vulneración podía traducirse en resultados tangibles y respaldo electoral masivo. Es la expresión concreta del desplazamiento de la “ventana de Overton” antes descrito: lo que durante tres décadas fue impensable como política pública ocupa hoy el centro del debate regional.

El atractivo del “modelo Bukele” en su propio terreno resulta difícil de ignorar. Con métodos expeditivos y prescindiendo de importantes garantías

judiciales, El Salvador redujo su tasa de homicidios de 54 por cada 100 mil habitantes en 2019 a apenas 1,9 en 2024. La percepción ciudadana de seguridad alcanzó el 90%. Para gobiernos latinoamericanos enfrentados a niveles elevados de violencia y criminalidad, la tentación de reproducir la fórmula es evidente.

Sin embargo, el “modelo Bukele” implica tres problemas que no se han tenido en cuenta al hablar de su difusión regional. El primer problema es de escala: trasladar el modelo salvadoreño a países latinoamericanos mucho mayores plantea enormes dificultades. Para alcanzar una tasa de encarcelamiento equivalente al 2% de la población adulta salvadoreña, Brasil tendría que mantener entre rejas a millones de personas. El propio Daniel Noboa ha comprobado en Ecuador las dificultades de contener mediante estados de excepción y militarización a organizaciones criminales mucho más fragmentadas y conectadas con redes transnacionales.

El segundo problema es de derechos humanos y democracia. Según la organización no gubernamental salvadoreña *Socorro Jurídico Humanitario*, al menos 554 salvadoreños han fallecido bajo custodia gubernamental. Unos 118 mil salvadoreños, alrededor del 2% de la población adulta están encarcelados —lo cual duplica la capacidad carcelaria—, muchos de ellos sin sentencia firme, con vulneración de derechos humanos y con un acceso limitado a abogados y familiares. Además, el modelo supone la prolongación de estados de excepción, la concentración del poder en el líder punitivo y el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la comunicación populista. La combinación tiene el potencial de socavar la democracia desde dentro⁶.

El tercero problema es económico: un aumento de la seguridad no se traduce automáticamente en un aumento del bienestar económico. El Salvador ha tenido un menor crecimiento económico que el resto de los países centroamericanos —a pesar del dinamismo que han adquirido los sectores de construcción y turismo—, y ha atraído —en proporción al tamaño de su economía— menos inversiones extranjeras directas que el resto de la región desde el inicio de la gestión de Bukele.

Por otra parte, los votantes latinoamericanos también se encuentran preocupados por la falta de empleos de calidad y de oportunidades para la movilidad social.

⁶ Steven Levitsky & Lucan A. Way. *Competitive authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*. Cambridge University Press, Nueva York, 2010.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL)⁷ indica que la región encara tres grandes trampas o desafíos estructurales: (a) baja capacidad de crecimiento económico, (b) alta desigualdad y limitada movilidad social, y (c) debilidad institucional acompañada de una gobernanza poco efectiva. Estos desafíos, que están profundamente interconectados y se retroalimentan, generan un círculo vicioso de estancamiento productivo, exclusión social y fragilidad institucional.

La “marea rosa” de la década de 2000s gozó de un superciclo en los precios de las materias primas y de una globalización en expansión. La renta extraordinaria de las exportaciones permitió introducir subsidios, mejorar los salarios, formalizar los empleos y ampliar el acceso al crédito, a la educación y a la salud, aunque sin transformar las capacidades productivas de la región. El número de personas en situación de pobreza disminuyó y las izquierdas regionales construyeron sobre ese desempeño un bloque político regional hegemónico.

Con la caída de los precios de las materias primas en 2014, seguida de la pandemia del COVID-19 y la policrisis global, sobrevino una década larga de estancamiento económico y retroceso social, con lo cual el optimismo se transformó en frustración y decepción. Esto explica la menor duración del giro a la derecha tradicional u “ola azul” en el período 2015-2018 y la posterior “marea rosa 2.0” en el período 2018-2022.

Por tanto, si aspira a consolidarse como bloque político regional hegemónico, la actual “ola naranja” debe lograr resultados concretos a pesar del entorno externo marcado por la hipoglobalización —con proteccionismo, relocalización productiva y securitización de las cadenas de suministro—, la rivalidad geopolítica entre grandes potencias, la crisis climática y ecológica, y la disrupción tecnológica.

Las metas de crecimiento económico anunciadas —por ejemplo, un 7% de crecimiento en Colombia, un 5-6% en Perú y un 4% en Chile— exigen transformaciones productivas que ningún gobierno de la región ha logrado en más de una década.

Conviene, sin embargo, distinguir los plazos en que cada demanda ciudadana admite una respuesta eficaz. Las mejoras en materia de seguridad ciudadana y gestión económica son posibles dentro de un mismo mandato: la caída de los homicidios en El Salvador y la desaceleración de

⁷ CEPAL, *Superar las trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe en la era digital: el potencial transformador de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial*, Santiago de Chile, marzo de 2025. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/80841-superar-trampas-desarrollo-america-latina-caribe-la-era-digital-potencial>

la inflación en Argentina, con independencia del juicio que merezcan sus costos institucionales y sociales, se produjeron en plazos de dos a tres años y fueron percibidas como logros por sus respectivos electorados. Empero, la creación de empleo formal y la apertura de oportunidades de movilidad social operan en un horizonte distinto, ya que dependen de la calidad educativa, de la apuesta por la ciencia y la tecnología, de la atracción de inversiones extranjeras y del tránsito hacia modelos productivos sostenibles y digitalizados, los cuales son factores que exceden un período presidencial.

De ello se sigue la principal tentación que deben encarar los líderes de la “ola naranja”: centrarse en resultados rápidos en las materias que pueden decidir elecciones e intentar mantenerse en el poder mientras encuentran —si es que lo pretenden— respuestas a los problemas de naturaleza estructural, con el riesgo de diferirlas indefinidamente.

Con todo, las ventanas estructurales favorables no son completamente inexistentes. La demanda global de minerales críticos, los nuevos hallazgos de hidrocarburos no convencionales y en aguas profundas, y las potencialidades en materia de productos agroalimentarios y de servicios digitales configuran un conjunto de oportunidades para la región que resulta apreciable. Comparten, sin embargo, una limitación común: se trata en todos los casos de oportunidades que generan renta sin generar necesariamente encadenamientos productivos ni empleos formales bien remunerados en la escala que la demanda social requiere; además las tres primeras reproducen el patrón primario-exportador.

Además, los minerales críticos y los hidrocarburos quedan enmarcados en la lógica de seguridad hemisférica de la Administración Trump 2.0, con la consiguiente limitación de la renta que los gobiernos latinoamericanos pueden captar y orientar al desarrollo de sus respectivos países.

El efecto Trump.

Buena parte de los líderes de la “ola naranja” ha construido su imagen y legitimidad sobre una estrecha cercanía con el Presidente Trump, quien ha intervenido abiertamente para favorecer candidaturas como las de Milei, Asfura, De la Espriella y Bolsonaro. Muchos de ellos previamente habían peregrinado a su lujosa residencia en Palm Beach. De hecho, el Presidente Trump se vanaglorió del triunfo de Kast y de varios líderes asistentes en la Cumbre *Escudo de las Américas* celebrada en Doral en marzo de 2026: “Piden mi apoyo y ganan”.



Por ello, hoy por hoy, podríamos hablar de un “Foro de Mar-a-Lago” asociado a la “ola naranja”, como en su momento lo estuvo el “Foro de São Paulo” a la “marea rosa” y el “Grupo de Puebla” a la “marea rosa 2.0”. La diferencia radica en que el primero es una red transnacional informal de líderes de derecha, mientras el segundo es una plataforma regional formal de partidos y movimientos de izquierda, y el tercero, un espacio iberoamericano informal de concertación de líderes de izquierda.

A cambio, el Presidente Trump ha exigido un alineamiento con su agenda hemisférica a los líderes de la “ola naranja”. De hecho, la Administración Trump 2.0 ha dedicado más atención y recursos al Hemisferio Occidental que cualquier otra en las últimas tres décadas. Esto ha ocurrido porque el Hemisferio es fundamental para algunas de las prioridades domésticas más importantes del Presidente Trump: detener la inmigración irregular, reducir la mortalidad por consumo de drogas ilícitas y garantizar la seguridad a largo plazo de EEUU en materia de suministro de energía y minerales críticos⁸. A ello se suman dos objetivos de política exterior: controlar

⁸ Brian Winter, “Trump is remaking Latin America. The short-term results and the long-term risks of the ‘Donroe Doctrine’” en *Foreign Affairs*, 9 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.foreignaffairs.com/americas/trump-remaking-latin-america>

Groenlandia como puerta de acceso al Ártico y hacer retroceder la influencia de China y otros rivales geopolíticos de EEUU en América Latina.

El elemento más llamativo de la política de la Administración Trump 2.0 hacia América Latina es la manera descarada en que evoca la política del “gran garrote” del Presidente Theodore Roosevelt, desplegando un abierto intervencionismo en lo que considera como un área de influencia exclusiva. La nueva *Estrategia de Seguridad Nacional*⁹, publicada en noviembre de 2025, formalizó el lanzamiento del “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe “para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental”; indicando que denegará “...a los competidores ajenos al Hemisferio la capacidad de desplegar fuerzas u otras capacidades amenazantes, así como de poseer o controlar activos de importancia estratégica”, para lo cual pretende “enlistar y ampliar” una red de alineamientos verificables.

En la citada Cumbre *Escudo de las Américas*, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, desarrolló el concepto geopolítico de “Gran América del Norte”, el cual redefine el perímetro de seguridad inmediato de EEUU, desde Alaska y Groenlandia hasta el Norte de América del Sur (desde Ecuador hasta las Guayanas, pasando por Colombia y Venezuela). En esta área, EEUU tendrá una mayor implicación, reforzando su capacidad de despliegue y control de activos estratégicos. Mientras que con los países que se encuentran al Sur del Hemisferio, es decir, más allá de la Amazonía y la Cordillera de Los Andes como barreras geográficas, EEUU fortalecerá alianzas y el reparto de cargas (*burden sharing*) de la defensa hemisférica. Esto se inscribe en la tradicional concepción geopolítica estadounidense sobre el Hemisferio, tal como nos recuerda Robert Kaplan al glosar a Nicholas Spykman:

“Y la realidad geográfica fundamental del Hemisferio Occidental, dice [Spykman], es que la división no se encuentra entre Norteamérica y Sudamérica, sino entre el área al norte de la selva ecuatorial dominada por el Amazonas y el área al sur de esta, de lo que se deduce que Colombia y Venezuela, así como las Guayanas, a pesar de encontrarse en la costa septentrional de Sudamérica, funcionalmente forman parte de Norteamérica y el Mediterráneo americano. Su mundo geopolítico es El Caribe, y tienen relativamente poco que ver con los países que se extienden al sur de la selva amazónica, a pesar de que comparten el mismo continente”¹⁰.

En ese marco estratégico se manifiesta el plegamiento de los líderes de la “ola naranja” latinoamericana a la Administración Trump 2.0. No obstante,

⁹ The White House, *National Security Strategy*, Washington, noviembre de 2025. Disponible en: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf>

¹⁰ Robert Kaplan, *La venganza de la geografía. Cómo los mapas condicionan el destino de las naciones*, RBA, Barcelona, 2013, pp. 132-133.

esto puede convertirse en un boomerang a largo plazo. En el siglo XX, el intervencionismo en El Caribe y Centroamérica alimentó un sentimiento anti-estadounidense que terminó capitalizando figuras como Juan Domingo Perón en Argentina y Fidel Castro en Cuba. Con decisiones de calado aún por tomar en la política estadounidense hacia Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, el regreso del intervencionismo en el siglo XXI podría tener, en última instancia, el efecto contrario al que el Presidente Trump desea: alejar a la región de EEUU y aproximarla a China. Además, los líderes de la “ola naranja” quedan expuestos a ser denunciados como “entreguistas” por sus contrincantes, sobre todo las izquierdas regionales ansiosas de regresar al poder.

En otro orden de ideas, en la medida que nos alejamos de la “Gran América del Norte”, los líderes de la “ola naranja” practican un alineamiento menos consistente con la Administración Trump 2.0, ya que dependen de China como principal socio comercial e inversionista. La propia Presidenta Keiko Fujimori sostuvo durante la campaña electoral la necesidad de preservar la relación económica con Beijing, invocando la pertenencia de ambos países al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (por sus siglas en inglés, APEC).

El Presidente Kast ha dicho que no considera “incompatible” tener buenas relaciones con China y EEUU, “siempre pensando en el bienestar de Chile y su gente”. China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio comercial que alcanzó los 67.105 millones de dólares en 2025, mientras que el país suramericano es uno de los pocos del Mundo que mantiene un superávit comercial con el gigante asiático, que se ubicó en alrededor de 14.300 millones de dólares en 2025. Por ello, el Canciller chileno Francisco Pérez Mackenna fue enviado recientemente a Beijing para manifestar la voluntad de profundizar los lazos económicos y ampliar la cooperación tecnológica bilateral, y como antesala de la asistencia de Kast a la Cumbre APEC en Shenzhen en noviembre de este año.

Incluso el Presidente Milei, que prometió romper los lazos con China, ha visto cómo las exportaciones argentinas hacia China alcanzaron el récord histórico de 9.765 millones de dólares en 2025 —desplazando a Brasil como primer destino—, aunque la balanza comercial sigue siendo negativa dado que las importaciones desde ese país se ubicaron en 17.954 millones de dólares en 2025. Una de las claves del vínculo comercial es su complementariedad, ya que Argentina provee materias primas y productos agropecuarios (sobre todo, litio, carne y soya), mientras que China coloca en el país suramericano bienes industriales y tecnológicos. Además, han aumentado las inversiones chinas en minería, infraestructuras y energías

renovables. Con el propósito de consolidar la relación económica bilateral, una delegación argentina de alto nivel visitará Beijing antes de que finalice 2026, la cual estará integrada por el Canciller Pablo Quirno, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Ministro de Economía, Luis Caputo.

Entonces, los líderes de la “ola naranja” del Cono Sur optan por equilibrar pragmáticamente el plegamiento hacia EEUU en el plano político-estratégico y el mantenimiento de las beneficiosas relaciones económicas con China. Esa postura se sostiene mientras ambas exigencias no colisionen, por ejemplo, con las inversiones chinas en infraestructuras estratégicas, redes de telecomunicaciones y contratos de minerales críticos. Como precedente tenemos la presión diplomática a la cual sometió la Administración Trump 2.0 a Panamá para revocar las concesiones a empresas chinas dedicadas a la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal.

En este sentido, la Administración Trump 2.0 ha presionado a Chile mediante la revocación de visas a tres funcionarios que formaban parte del gobierno del Ex-Presidente Boric, para que no continuase con el proyecto de cable submarino de fibra óptica CCE que conectaría a la región de Valparaíso con Hong Kong, posicionando al país como punto de conexión de América del Sur con Asia-Pacífico. El Presidente Kast archivó el proyecto en marzo de 2026, optando por impulsar el proyecto de cable Humboldt que conectará la región de Valparaíso con Sídney y Ciudad de Panamá.

La Administración Trump 2.0 también ha expresado al gobierno de Milei su recelo respecto a la base espacial china en Neuquén, y no resulta descartable que haga lo propio con la Presidenta Keiko Fujimori respecto al puerto de Chancay.

Finalmente, la identificación de los líderes de la “ola naranja” con el mandatario estadounidense los asocia a la incertidumbre respecto a su futuro. El período actual del Presidente Trump concluye en enero de 2029, las elecciones legislativas de medio término que tendrán lugar en noviembre de 2026 pueden reducir su margen de maniobra y una continuidad republicana más allá de 2029 no puede darse por sentada.

En suma, una política exterior de las derechas latinoamericanas anclada en la relación personal y las simpatías ideológicas con el mandatario estadounidense constituye, en términos estrictamente realistas, una forma deficiente de inserción externa, tanto más cuanto que las contrapartidas a cambio del alineamiento ofrecidas por la Administración Trump 2.0 han sido discrecionales, contingentes y revocables.

Esto último quedó en evidencia con el acuerdo de intercambio de divisas (*swap*) entre el Departamento del Tesoro y el Banco Central de Argentina por hasta 20 millardos de dólares suscrito como apoyo financiero a una semana de las elecciones legislativas de octubre de 2025, y condicionado a una victoria de las fuerzas políticas que respaldan a Milei. El tramo efectivamente ejecutado alcanzó 2,5 millardos de dólares, el cual fue cancelado por el Banco Central de Argentina en diciembre de 2025. El efecto estabilizador provino, por tanto, de la señalización política antes que del desembolso financiero, lo que ilustra a la vez la eficacia inmediata del instrumento y su naturaleza discrecional.

Brasil como punto de inflexión.

Las elecciones brasileñas del próximo 4 de octubre de 2026, con eventual segunda vuelta el 25 de octubre de 2026, definirán también el futuro de la “ola naranja”.

A primera vista, las elecciones brasileñas parecen una revancha de 2022: otra vez Lula contra Bolsonaro en un país muy polarizado. Empero, el escenario no es exactamente el mismo: con el Ex-Presidente Jair Bolsonaro en la cárcel al ser condenado en septiembre de 2025 por el Tribunal Supremo Federal por intento de golpe de Estado, su hijo mayor Flávio Bolsonaro intenta capitalizar su espacio político; mientras el Presidente Lula busca la reelección, que sería su cuarto mandato no consecutivo.

El factor Trump juega un papel crucial en la campaña. El Senador Eduardo Bolsonaro —tercer hijo del Ex-Presidente Jair— se encuentra residenciado en EEUU —aunque previamente había anunciado que solicitaría asilo político—, tras la condena del Tribunal Supremo Federal en junio de 2026 por intento de coacción a la justicia brasileña a través del lobby ante la Administración Trump 2.0 para imponer sanciones y aranceles a productos brasileños, así como retirar visados y bloquear cuentas a los jueces que llevan el caso de su padre.

La Administración Trump 2.0 impuso en 2025 gravámenes del 50% sobre buena parte de las exportaciones brasileñas, lo cual fue anulado posteriormente por la Corte Suprema estadounidense. El episodio obligó a los exportadores brasileños a empezar a reorientarse hacia otros mercados.

Las medidas arancelarias hoy vigentes son dos y de naturaleza distinta. La primera es el arancel del 25% anunciado el 15 de julio de 2026, tras una investigación de un año amparada en la Sección 301 de la legislación comercial, que Washington justificó por las políticas brasileñas en materia de comercio digital, sistemas de pago electrónico, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal, con exenciones para la

carne, el café y las aeronaves. La segunda es el gravamen adicional de hasta 12,5% adoptado el 23 de julio de 2026, el cual fue justificado con el argumento de esfuerzos insuficientes en el combate al trabajo forzoso.

La primera medida fue recibida en Brasilia como una represalia por el encarcelamiento del Ex-Presidente Bolsonaro. El segundo arancel sobre trabajo forzoso alcanza a sesenta economías, entre ellas China, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y la propia Argentina, de modo que el gobierno más alineado con la Administración Trump 2.0 en la región recibió el mismo gravamen que el gobierno más confrontado, apenas nueve meses después del respaldo financiero que le proporcionó el Departamento del Tesoro. Esto confirma que la política arancelaria de la Administración Trump 2.0 obedece a una lógica propia que el alineamiento político no neutraliza, y ese dato deberían ponderarlo con cautela los líderes de la “ola naranja”.

En cualquier caso, el Presidente Lula pretende alzarse con la victoria presentándose como el líder de los resultados tangibles y de la defensa de la soberanía nacional frente a Flávio Bolsonaro, a quien señala como inexperto y subordinado al Presidente Trump. Su estrategia electoral busca eludir así las diferencias ideológicas, llamando además a los ciudadanos a comparar resultados en materia de empleos, inflación y servicios sociales entre el período de Jair Bolsonaro (2019-2022) y el período que ahora culmina (2023-2026). También ha criticado la gestión de Bolsonaro en cuanto al manejo de la pandemia del COVID-19, que dejó alrededor de 700 mil víctimas, y ha presentado medidas de combate al crimen organizado para disminuir la percepción de debilidad de su propia gestión en esta materia. En este sentido, Lula parece haber captado bien el motor de la “ola naranja” que ha venido recorriendo América Latina.

El mandato de Lula culmina con buen desempeño: reducción del desempleo al 5,4%, disminución de la pobreza extrema al 4,4% y salida de Brasil del *Mapa del Hambre* de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) después de que reingresase en el mismo durante el mandato de Bolsonaro.

Sin embargo, pesa el desgaste de la figura de Lula que muchos consideran debe dar paso a personas más jóvenes o rechazan abiertamente por asociarlo con escándalos de corrupción del pasado.



Por otra parte, Flávio Bolsonaro propone mano dura contra el crimen organizado, una reforma del Poder Judicial y una política exterior con énfasis en el acercamiento a Trump-Milei-Netanyahu. Además, apuesta por el crecimiento demográfico del evangelismo neopentecostal que promueve una agenda social conservadora y hostil al ideario del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. Sin embargo, sólo cuenta con el apoyo del Partido Liberal (PL), al no lograr sumar el respaldo de los partidos del “centrão” ni evitar otras candidaturas conservadoras. Además, tiene un mayor rechazo en las encuestas que Lula.

Los últimos sondeos apuntan a unos resultados reñidos. La encuesta Quaest de mediados de agosto arroja ventaja para Lula en primera vuelta (38% frente a 31%) y empate técnico en segunda vuelta (43%-40%, con ligera ventaja para Lula que casi equivale al margen de error técnico). La encuesta Nexus/BTG Pactual de mediados de agosto también arroja ventaja para Lula en primera vuelta (41% frente a 36%) y empate técnico en segunda vuelta (47%-44%, con ligera ventaja para Lula que casi equivale al margen de error técnico). La encuesta de Datafolha de finales de julio da ganador a Lula por amplio margen en primera vuelta (40% frente a 32%) y por margen más ajustado en segunda vuelta (48% frente a 43%).

Una victoria de Flávio Bolsonaro reduciría el espacio de las izquierdas latinoamericanas a México, Guatemala y Uruguay, sin más peso específico que el que pueda aportar el primero, y trasladaría la siguiente prueba a las elecciones intermedias mexicanas de 2027. En cambio, una reelección de Lula contendría la “ola naranja” y confinaría al “Escudo de las Américas” a

la condición de club político de geometría limitada, sin la masa crítica que requeriría una arquitectura hemisférica de seguridad.

El calendario electoral latinoamericano de 2027 sugiere que la “ola naranja” mantendrá impulso. Bukele y Milei aspiran a la reelección en El Salvador y Argentina, e incluso el “modelo Bukele” está presente en las principales candidaturas en Guatemala. No obstante, las próximas elecciones brasileñas serán determinantes: podrían amplificarla hasta convertirla en una ola salvaje o erigirse en el rompeolas que la contenga.

Legitimidad de resultados.

En definitiva, los líderes de la “ola naranja” latinoamericana tienen el reto de entregar resultados tangibles, pese a tener que gobernar con mayorías parlamentarias estrechas y ante electorados enfocados en el desempeño. Los avances en materia de seguridad ciudadana y una gestión económica eficaz permitirán superar las primeras reválidas electorales. Sin embargo, las mejoras en el poder adquisitivo, la creación de empleos de calidad y la generación de oportunidades de movilidad social determinarán si este ciclo político se convierte en algo más que un episodio pasajero.

Si logran esta última tarea, la “ola naranja” se consolidará y tendrá la oportunidad de convertirse en un bloque político regional hegemónico como lo fue la “marea rosa” en la década de 2000s. La comparación tiene, no obstante, un límite importante. Aquella hegemonía política se construyó en un entorno externo más favorable: un superciclo de precios de las materias primas que elevó los ingresos fiscales y permitió aumentar la inversión social sin acometer transformación productiva alguna. Hoy por hoy, no existe un equivalente. Las oportunidades disponibles —minerales críticos, hidrocarburos no convencionales y en aguas profundas, productos agroalimentarios y servicios digitales— son reales, pero se distribuyen de manera desigual entre países y no generan un excedente fiscal capaz de sustentar una redistribución social amplia.

En cambio, si fallan en dicha tarea, el mismo mecanismo de voto retrospectivo que hoy favorece a la “ola naranja” operará en su contra, y en el futuro la recordaremos como hoy lo hacemos con otros ciclos políticos efímeros.

() Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI). Doctor en Ciencias Políticas mención Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (EEI-UCV).*